

El gran encuentro

Me gusta

Compartir

4

Twitter

g+1

0

Comentar

0

Los indicadores y las percepciones en la seguridad ciudadana.

Durante años, en referencia a la seguridad ciudadana, un gran problema que las políticas públicas debían administrar era la diferencia entre la percepciones y los indicadores de victimización, resultado de lo cual se tenía que atender el combate al delito que causaba más temor en la población, especialmente el hurto.

Esta diferencia se ha borrado; la percepción se ha encontrado con la realidad tanto por el aumento de los delitos como por el robo al paso, un signo de la falta de éxito de las políticas que no lo abordaban en sus causas, como por el incremento exponencial de otros. De ello da cuenta la reciente investigación realizada por el Barómetro de las Américas, con 25 países estudiados.

La nueva situación está determinada por la idea de que la seguridad es el principal problema del país, de acuerdo con casi la mitad de los peruanos (47%), a diferencia de hace nueve años, cuando solo tenían esa sensación uno de cada diez peruanos. Esta apreciación ciudadana coloca al Estado ante un desafío superior cuando el anterior ni siquiera había sido abordado.

El sondeo nos pone ante realidades sólidas, como que el Perú ocupa el primer lugar en la tasa de victimización en América Latina (31%) superando a Venezuela. Otro dato es el escalamiento de la violencia en la comisión de los delitos, expresado en un alto índice de robo “al paso” (32%), robo con amenaza (19%), robo con arma (18%) y la socialización de la extorsión (8%) hasta hace poco un delito de baja incidencia.

Este no es un cuadro aislado; se complementa con una percepción igualmente en alza sobre las capacidades institucionales para enfrentar las demandas de seguridad. Según el estudio, el 26% ha sido víctima de la corrupción, en tanto experimenta una baja confianza en el sistema judicial (34%) en la Policía (39%), y en los partidos (25%).

Lamentablemente, el relacionamiento de estas cifras está siendo obviado. Son objeto de interpretaciones muy sectoriales. Como que la falta de confianza en la Policía no se debe a la corrupción y la deficiencia de capacidades operativas, sino a que fue unificada hace casi tres décadas o a la falta de efectivos policiales.

La discusión que este y otros estudios abre es la posibilidad de que el Estado pueda enfrentar estos desafíos en las condiciones actuales, el tiempo que demoraría el diseño de una política integral y convenientemente financiada, y los riesgos de una salida populista que prometa soluciones rápidas y que, siendo irreales por la naturaleza del problema,

agraven los índices actuales en lugar de disminuirlos, como ha sucedido en otros países de la región.

Colocados en el punto límite de las alternativas, por la cercanía de la elección de un Gobierno que administrará este delicado asunto por cinco años, es lícito preguntarse si la inquietud ciudadana está siendo valorada con la seriedad debida por los liderazgos que se aprestan a competir electoralmente o si, como hace cinco años, dejaremos pasar una valiosa oportunidad.